

“ESO ES SER POBRE E INDIO EN ESTE PAÍS”.
Repercusiones urbanas e implicaciones sociales
de la discriminación y la exclusión:
lecciones de El Alto, Bolivia

*Juan Manuel Arbona*¹

INTRODUCCIÓN

En los momentos críticos de octubre de 2003, una masa humana se desplegaba desde El Alto por las laderas de La Paz, encauzadas por vertientes de asfalto, y se dirigía a la sede de gobierno. Miles de marchistas —hombres, mujeres, viejos y jóvenes— reclamaban su derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones acerca del uso de los recursos naturales (hidrocarburos) y demandaban el derecho a tener derechos, que en esos días eran atropellados por la violencia estatal. En la marcha se observaban *q'orawas* (ondas para lanzar piedras) y cartuchos de dinamita; *wiphalas* (símbolo de los pueblos indígenas) y cascos de mineros. Estos símbolos expresaban las múltiples fuentes de identidades y memorias históricas que estaban saliendo a la superficie y conformando espacios políticos contestatarios. Estos hechos también mostraron la compleja diversidad de historias y memorias que define a la ciudad de El Alto, y lo que significa ser pobre e indio en Bolivia.

¹ Profesor titular del Growth and Structure of Cities Program del Bryn Mawr College (Estados Unidos) y docente de la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia (UPIEB) de La Paz (Bolivia).

El Alto —epicentro de las jornadas de octubre—² revela los resultados de un régimen político que ha generado exclusión social y pobreza. De acuerdo con el último censo en esta ciudad (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001a), la gran mayoría de la población (647.067) se considera indígena (81,3%)³ y depende de la economía informal (70,6% de la Población Económicamente Activa (PEA)). La transformación de El Alto, que en el espacio de una generación pasó de ser un barrio marginal de La Paz a la tercera ciudad del país, es un dramático reflejo del impacto de las políticas de reestructuración económica e institucional definidas el proyecto neoliberal. Estas reformas han tenido como consecuencia una cultura política que combina elementos del sindicalismo y formas andinas de organización territorial-política (*ayllu*), con un trasfondo de marcada inseguridad económica y frustración social.⁴ En este sentido, la cultura política de El Alto navega en el delta donde confluyen la lógica neoliberal de bienestar individual y la lucha por un bienestar colectivo; la tensión entre la reivindicación coyuntural y las propuestas de alternativas estructurales; la tensión de la identidad indígena basada en un imaginario histórico idealizado/hibridizado y la demanda social de vivir las promesas de la modernidad.

A nivel metodológico, este ensayo se nutre de ocho años de trabajo e investigación en El Alto, así como de entrevistas con testigos y actores de las jornadas de octubre de 2003. Esta información cualitativa es complementada con datos cuantitativos oficiales que ayudan a enmarcar la situación en esta ciudad.

El propósito de este artículo es analizar cómo y bajo qué condiciones se concentran los procesos de discriminación y exclusión social de/en El Alto, que influyeron en la creación de espacios políticos contestatarios durante las jornadas de octubre de 2003. Para analizar estas dinámicas, este texto se enfocará en tres procesos: 1) las tensiones que surgen a raíz de las políticas neoliberales y cómo éstas se han concentrado en una ciudad empobrecida e indígena; 2) las rupturas sociales generadas, con énfasis en las jornadas de octubre de 2003, que resaltan cómo y bajo qué circunstancias se construyeron espacios políticos

² Estas jornadas llevaron a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y dejaron como resultado 63 muertos y 315 heridos (Auza, 2004).

³ Cabe indicar que para esta pregunta el censo sólo tuvo en cuenta a las personas mayores de 15 años, lo que sugiere que el número es aún mayor (Mamani, 2005c).

⁴ Silvia Rivera define *ayllu* como “unidad de territorio y parentesco que agrupaba a linajes de familias emparentadas entre sí, pertenecientes a jerarquías segmentarias y duales de diversa escala demográfica y complejidad. [...] La compleja organización social andina ha sido comparada con un juego de cajas chinas, vinculadas entre sí por relaciones rituales y simbólicas que permitieron a los niveles superiores un alto grado de legitimidad en su dominación sobre los niveles inferiores” (Rivera, 1993: 36).

contestatarios; 3) el papel que jugaron las redes barriales y las formas en que se articularon identidades de clase e indígenas al organizar la población alteña.

El argumento central de este ensayo es que los factores socioeconómicos vividos en El Alto han dado como resultado una ciudad excluida y discriminada. Por su parte, los residentes han (re)articulado espacios políticos contestatarios a partir de la organización de redes barriales, que constituyen las formas de organización territorial fundadas en historias y memorias colectivas. Este argumento está enmarcado en la concepción de que existe una relación dialéctica entre espacios urbanos y procesos sociales. Por un lado, estos procesos de discriminación y exclusión tienen una manifestación concreta en la construcción y organización de espacios urbanos; y por otro, estos espacios influyen en la organización de procesos sociales, ya sean contestatarios o de estabilización (naturalización) de las inequidades plasmadas en espacio (Harvey, 1997). Este texto está enmarcado por la problemática de lo que ocurre cuando los procesos hegemónicos (de una infraestructura institucional⁵ que legitima y naturaliza la discriminación y exclusión social) son plasmados en un espacio determinado y cómo estos procesos son retados desde estos espacios.

CIUDAD, CONFLICTO Y ESPACIOS POLÍTICOS

Antes de hacer una presentación de esta ciudad, de cómo se han establecido y consolidado los espacios de discriminación y exclusión, y de los eventos de crisis vividos durante las jornadas de octubre, podemos realizar algunas reflexiones generales sobre lo urbano, la generación de los conflictos y la reacción a éstos, y cómo durante éstos se vislumbra la creación de espacios políticos contestatarios que responden a historias y memorias localizadas. Castells nos presenta un punto de partida para el análisis de ciudades. Para él:

[...] las ciudades... son productos históricos, no solo en su materialidad física, sino también en sus significados culturales, el papel que juegan en la organización de la sociedad, y las vidas de los residentes. La dimensión básica en la transformación urbana es de debate conflictivo entre clases y actores sociales [matizadas por las historias específicas de residentes] sobre el significado de la ciudad, el significado de espacios

⁵ Por infraestructura institucional se entiende no sólo el aparato estatal, sino también los partidos políticos (en poder y oposición) y las entidades de la sociedad civil que representan intereses económicos y políticos específicos. Es a partir de esta infraestructura institucional que se ha implementado el proyecto neoliberal y desde donde se intenta legitimar este régimen político.

en la organización de estructuras sociales, y el contenido, jerarquía, y destino de las ciudades en relación a la estructura social. (Castells, 1983: 302)

La lectura de las ciudades como un “producto histórico” donde se debaten los significados de la ciudad y los accesos/derechos a ésta, es un punto de partida fundamental para analizar cómo se concretizan los procesos de discriminación y exclusión en espacios urbanos. Castells plantea cómo los procesos históricos establecen privilegios y exclusión que son plasmados en espacio, y los conflictos que surgen a partir de estas inequidades, que conllevan también la rearticulación de identidades que convergen en espacios urbanos (excluidos)⁶ y que alimentan la lucha por el derecho a la ciudad. ¿Cómo se establecen los derechos a la ciudad? ¿Qué formas de institucionalidad legitiman estos derechos? Y más importante aún: ¿quiénes y cómo luchan por estos derechos? Parte de mi argumento es que a través de estos procesos históricos y de sus manifestaciones espaciales se establecen, legitiman y naturalizan espacios de privilegio y exclusión, donde se forman y consolidan espacios políticos locales, de demanda o protección de provisión de servicios básicos y/o reconocimiento institucional.

En América Latina, la construcción histórica de espacios urbanos responde a los sistemas de producción, extracción o comercialización colonial, que requerían la concentración de población en espacios determinados, donde se plasman y refuerzan las jerarquías sociales,⁷ lo cual daba cuenta de la organización y función específica de las ciudades, donde se mantenía una tensa convivencia de espacios privilegiados y espacios de desamparo, bajo un mismo régimen político. Paralelamente, la concentración de población implicaba diferentes formas de vivir y convivir en/con la ciudad, así como diferentes formas de establecer y reproducir relaciones de poder, plasmadas en el espacio urbano. De manera similar, las ciudades son el nodo articulador de lo que Héctor Díaz-Polanco (1991) denomina “etnofagia estatal” y Félix Patzi (2000) —citando a Pierre Bourdieu (1989)— “violencia simbólica”, refiriéndose al papel de las instituciones de formación “ciudadana” (escuelas, museos, cuarteles, etc.) y los discursos de nación, a través de los cuales se naturaliza y legitima el poder de las clases dominantes y los espacios que ocupan. Estos procesos han sido trascendentales en la organización y construcción de las ciudades latinoamericanas.

⁶ Esto es muy diferente a que estos territorios sean simples contenedores de identidades. Para una crítica de esta visión de espacios, véase Harvey (1997).

⁷ Esto es evidente en las primeras ordenanzas de planificación urbana que recibió Pedrarias Dávila en el 1513 (Crouch, Garr y Mundigo, 1982). Cabe resaltar que las ciudades de los imperios inca y azteca también reflejaban esta dualidad (Von Hagen y Morris, 1998; Soustelle, 1996).

Los procesos de reestructuración económica e institucional que se han llevado a cabo desde comienzos de los años ochenta han tenido un importante impacto en la transformación económica, institucional y social en toda América Latina (Green, 2003). ¿Cuál ha sido el impacto de estos procesos en las ciudades? Sobre esto, Mike Davis (2004) se refiere a la globalización de los asentamientos precarios (*slums*). De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UNCHS), la actual población mundial urbana es de unos 3.200 millones (equivalente a la población mundial total en los años sesenta) y se espera que para 2007, la mitad de la población mundial viva en ciudades. En América Latina, la población urbana representaba el 75,4% (alrededor de 391 millones de personas) en 2000, y de éste, el 32% (125 millones) vive en zonas marginales, donde las necesidades básicas no son satisfechas (UNCHS, 2003: 246). Mientras que las ciudades —que constituyen una promesa implícita de mejores condiciones de vida y oportunidades, en relación con las zonas rurales— siguen atrayendo población considerada “desechable” dentro del contexto laboral, estos “nuevos” residentes de las ciudades siguen ocupando los espacios marginales/excluidos.

De manera paralela, las ciudades se han convertido en un factor sumamente importante en la articulación de los procesos de globalización de las finanzas y los mercados especulativos, bajo el discurso de que es la única alternativa para enfrentar los retos del desarrollo. Por lo tanto, se podría argumentar que las ciudades “se han convertido en la interfase institucional, política, y geográfica sobre y a través de las cuales las políticas contradictorias de la reestructuración capitalista [dando continuidad a un proceso de colonialidad dentro de un discurso democrático] son debatidas y luchadas” (Brenner, 2000: 374). Es decir, el proyecto neoliberal requiere espacios urbanos, no sólo como nodos articuladores que (en teoría) le permitirán acceder a los flujos globales de capital y participar de éstos, sino que también deben funcionar como megáfono de las promesas de estos procesos (o de las consecuencias de no ser parte de ellos).⁸ Al interior de estos procesos y promesas se generan espacios marginados, con una creciente población discriminada y excluida.

Esta afirmación nos lleva a otra pregunta: ¿cómo se ha logrado que estas políticas —que han generado, expandido y profundizado las desigualdades y han legitimado procesos de discriminación y exclusión— hayan podido mantenerse y reproducirse? Mi respuesta a esta situación tiene dos vertientes: una

⁸ De la Fuente (1995: 38) discutía que el proyecto neoliberal “es la teoría de la gobernabilidad a través de la administración de las expectativas... lo importante no es hacer cosas, sino aparentar que se hace. [...] Por eso el neoliberalismo es economía, sí, pero también y sobre todo es publicidad”.

discursiva-política y otra espacial-urbana. Por un lado, el proyecto neoliberal ha sido un “proceso manejado políticamente y regulado institucionalmente” bajo un régimen de consentimiento y coerción (Peck, 2004: 8). Gramsci (1971) discutía el concepto de hegemonía como un proceso que integraba coerción y consentimiento, sobre el cual se establece un margen de legitimidad para reproducir un régimen político a favor de intereses de clase específicos (Anderson, 1976). En este sentido, los procesos hegemónicos tienen tanto que ver con flujos económicos como con lo “ético-político en formular relaciones de dominación y subordinación” (Chin y Mittelman, 1997).

Estos procesos hegemónicos requieren instituciones de la sociedad civil y el aparato político-partidario del Estado, a lo que me refiero como la infraestructura institucional. A pesar de un “reconocimiento de fuerzas subordinadas”, Brenner (2000) sugiere que los procesos de construcción hegemónica nunca pueden ser completos debido a los desfases entre escalas institucionales, lo que convierte a este proyecto político en altamente inestable. Es decir, la hegemonía del proyecto neoliberal puede tener vigencia a nivel del Estado, pero a medida que estos procesos se acercan a localidades donde cotidianamente se viven tensiones —como en los barrios—, éstos comienzan a perder eficacia. Es en estos espacios localizados donde se cuestiona la legitimidad del régimen político, y desde donde se están comenzando a pensar y proponer alternativas a partir de una complejidad histórica local. En otras palabras, los procesos hegemónicos no sólo requieren una infraestructura institucional nacional, sino que ésta también debe responder a diferentes formas y actores de los espacios políticos locales.⁹

La otra vertiente de cómo se ha logrado mantener este régimen político por dos décadas, se refiere a las dimensiones espaciales (urbanas) del manejo y la implementación de este proyecto. Como lo mencioné anteriormente, en la actual coyuntura de globalización neoliberal, los espacios urbanos cumplen con los requisitos institucionales para facilitar los flujos de capital y la reproducción de un régimen capitalista. Sin embargo, los fracasos de este proyecto resaltan, particularmente en términos de aumento en los niveles de pobreza y la precariedad laboral, y la concentración de estos daños colaterales. Es decir que, a partir de estas políticas neoliberales, la discriminación y la exclusión se concentran y magnifican en espacios específicos de la ciudad. Como lo indican Jamie Peck y Adam Tickell, esta es una parte fundamental de las estrategias para manejar este régimen político, o más bien para manejar los fracasos de éste:

⁹ Charles Hale (2004) nos provee un ejemplo de esto en su discusión sobre el “multiculturalismo neoliberal”, en el cual la participación de los pueblos indígenas es promovida y celebrada siempre y cuando éstos “no se excedan” ni cuestionen las políticas económicas establecidas.

Siempre y cuando los daños colaterales de tales rupturas puedan ser localizados o desplazados en espacio o escala se pueden organizar condiciones positivas para sostener este tipo de reinversión regulatoria [de corte neo-liberal]. Una de las fortalezas del neo-liberalismo ha sido su capacidad de capitalizar sobre estas condiciones. (Peck y Tickell, 2002: 392)

En este contexto se concentran los daños colaterales, con la intención de neutralizarlos a través de estrategias clientelistas y el intento de mantener una apariencia de estabilidad política, elemento necesario para intentar atraer inversionistas (y sus promesas) y sostener el actual régimen político (Quisbert, 2003). En otras palabras, es en este contexto que los espacios urbanos de privilegio son organizados, protegidos y reproducidos.

En fin, es a través de la constitución de estos espacios, donde los procesos hegemónicos son más inestables, que las promesas neoliberales —canalizadas por una infraestructura institucional— tienen que enfrentar sus límites discursivos y fracasos. Es en estos momentos cuando el margen de legitimidad de la infraestructura institucional encuentra sus límites reales y las tensiones se convierten en rupturas. Es a partir de estos conflictos, que surgen a raíz de las tensiones generadas por la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, que los espacios urbanos están siendo transformados. Es en estos márgenes sociales donde se concentran la mayoría de los efectos negativos y donde se están construyendo espacios políticos contestatarios. Y es precisamente, a través de estas identidades en los márgenes sociales, que han sido excluidas y denigradas —que conforman un subsuelo político— que este régimen es retado.

Los procesos hegemónicos, en sus manifestaciones discursivas y concentraciones espaciales, generan movimientos contra-hegemónicos, que encuentran su fortaleza en espacios localizados. Los procesos de discriminación y exclusión —particularmente cuando éstos se concentran en espacios específicos de la ciudad— promueven y canalizan la formación de lo que Routledge (2003: 344-345) denomina espacios de convergencia, los cuales “generan suficiente terreno común para generar políticas solidarias”. Más allá de estas solidaridades, estos espacios:

[...] funcionan dentro de la penumbra de diferencias, conflictos y negociaciones. Como espacios negociados en multiplicidad y diferencia, estos pueden ser concebidos como sistemas dinámicos, contruidos a partir de interrelaciones e interacciones a través de todas las escalas espaciales. (Routledge, 2003: 346)

Por lo tanto, la convergencia de sujetos discriminados, excluidos y concentrados en un espacio determinado es la semilla con la cual se conforma

un subsuelo político, que surge a la superficie en momentos de crisis. Es aquí donde “se despliegan las prácticas políticas que se ejercen como los derechos que la gente cree que tiene o debería tener, aunque no los reconozca el Estado, o como libertades individuales y colectivas que no corresponden a derechos reconocidos” (Tapia, 2001: 133).

A partir de este marco conceptual, podremos analizar cómo El Alto se ha convertido no en un espacio (barrio) discriminado y excluido, sino en toda una ciudad, donde estos procesos se concentran. También podremos examinar cómo se generó un subsuelo político a partir de las identidades indígenas y mineras urbanizadas que han sido discriminadas y excluidas, y cómo éstas fueron un factor importante en la organización de espacios políticos contestatarios durante las jornadas de octubre de 2003. Pero antes de este análisis, se presentará un breve panorama general de la ciudad, y cómo ésta fue construida a raíz de la institucionalización de la discriminación y la exclusión.

EL ALTO: CONVERGENCIA DE PROCESOS E HISTORIAS

El Alto es una ciudad joven que ha vivido un precipitado crecimiento poblacional. Sólo hasta 1988 esta ciudad obtuvo su autonomía de La Paz y fue reconocida institucionalmente como tal. Hasta entonces, los vecindarios que hoy comprenden El Alto eran barrios marginales de la capital, pero las olas de emigrantes a mediados de los años ochenta transformaron este barrio marginal en un centro urbano con sus respectivos problemas (Sandoval y Sostres, 1989). Así, El Alto se convirtió en el enclave más pobre de la región metropolitana de La Paz y en un espacio racializado (el otro étnico), en el espacio distante de la ciudad moderna y más sofisticada de La Paz.

Regionalmente, El Alto funciona como destino y como espacio de transición. Opera como destino para miles de mujeres y hombres de zonas rurales que llegan a esta ciudad, guiados por la promesa de una ciudad con mejores servicios y oportunidades económicas. Sirve como destino para gran parte de los productos agropecuarios (e industriales) de las zonas rurales, donde son comercializados y distribuidos a los diferentes mercados de La Paz. Así mismo, El Alto es un espacio transitorio, donde circulan personas y productos, donde las identidades son apropiadas, rearticuladas y rechazadas, donde las visiones del futuro están ancladas en múltiples formas de definición de un pasado basado en una memoria colectiva, en historias de migraciones y asentamientos. En fin, hablar sobre El Alto nos incita a enfrentar esta ciudad como parte y producto de los procesos socioeconómicos y culturales vividos en Bolivia durante las últimas décadas. Además, nos reta a analizar temas de clase e identidad indígena, no como variables aisladas, sino como procesos que se entrelazan en tiempo y

espacio. Como lo describió una de sus residentes, El Alto “es una síntesis concentrada de la situación del país” (entrevista con EE, julio de 2001).

El Alto es un punto de convergencia de estas contradicciones, promesas, y contestaciones, donde lo local y lo global se encuentran en la economía informal. Estas actividades económicas precarias son una de las características importantes que evidencian las relaciones económicas y sociales, y que condicionan las actividades políticas en El Alto. Por un lado, estas relaciones sociales se funden con las costumbres y memorias históricas “traídas” por los emigrantes que conforman esta ciudad (Albó *et al.*, 1981; Sandoval y Sostres, 1989). Por otro lado, estas actividades económicas sirven como nexo entre los requisitos del Estado frente a la economía global del mercado, las instituciones que salvaguardan su estabilidad, y las expectativas de la sociedad civil hacia el Estado (Arbona, 2001). En este sentido, la precariedad laboral es uno de los principales ejes que muestran cómo los alteños(as) construyen espacios políticos sobre los cuales se organiza y construye la ciudad.

[El Alto] es ciudad de contrastes sociales porque cobija a grandes sectores sociales con pobreza extrema y a su vez a grupos socioeconómicos en proceso de enriquecimiento basados, en las actividades del comercio y el transporte, y en redes sociales y culturales especialmente configuradas para amparar la acumulación de riqueza. (Rojas y Guaygua, 2002: 11)

Esta breve descripción de El Alto nos lleva a la pregunta: ¿qué es El Alto para los alteños? La mayoría de las personas entrevistadas (en conversaciones llevadas a cabo en 1998, 1999, 2001, 2003 y 2005) enfatizaban los aspectos culturales y la situación de pobreza, así como la gran frustración y desconfianza hacia las entidades políticas/institucionales. Otros discutieron acerca de que se sienten como ciudadanos de segunda categoría por el solo hecho de vivir en El Alto. La visión de los alteños reflejó sus sentimientos de discriminación y orgullo; de pobreza y esperanza; de desilusión y lucha. Pablo Mamani captura lo que significa esta ciudad para sus residentes.

El Alto es una ciudad compleja desde su constitución, desde sus relaciones sociales y económicas, en su vida diaria [...]. El paisaje de la ciudad se nutre de estas actividades para construir y reconstruir permanentemente las memorias colectivas, festivas y de luchas cotidianas que realizan hombres y mujeres. [...] Las calles muestran esta frenética actividad que la convierte en una de las ciudades con gran movimiento que produce sentidos y dignidades individuales y colectivas. (Mamani, 2005b: 3)

Por otro lado, la relación entre los alteños y los paceños se caracteriza por una gran tensión, reflejada en la discriminación étnica y las diferencias económicas. Desde La Paz, se tiene la visión de que El Alto es una ciudad por la que sólo se pasa, o como un paceño me comentó una vez: “es una ciudad de indios”. Los alteños son vistos como personas peligrosas, como delincuentes en una ciudad que funciona a través de la presión, del bloqueo, de la huelga. Esa percepción de El Alto es constantemente reproducida por los medios de comunicación, que parecen interesarse en los sucesos de esta ciudad sólo cuando hay bloqueos o crímenes.

En esta ciudad —que por un lado representa un hogar, un refugio y un punto de partida para quienes desembarcan diariamente en las avenidas 6 de marzo, Juan Pablo II o en el camino a Viacha, y por otro recibe la mirada de desprecio y repudio a sus residentes—, palpitan las tensiones de la globalización en la vida cotidiana. En las próximas secciones se describirá y analizará cómo los procesos de discriminación laboral y étnica han sido centrales en la construcción de esta ciudad y cómo se organizó un movimiento contestatario.

EL ALTO: URBANIZACIÓN, POBREZA Y DISCRIMINACIÓN LABORAL

Antes de la revolución del 1952, El Alto era parte de la zona rural adyacente a La Paz, controlada por los terratenientes paceños. La población de esta ciudad ha aumentado constantemente desde los años cincuenta (época en la que había una población de aproximadamente 11.000 habitantes). De acuerdo con el último censo realizado en 2001, la población de El Alto sobrepasa los 650.000 habitantes. Hoy, El Alto es un centro urbano importante, no sólo por su gran —y creciente— población, sino también porque alberga la mayor parte de las industrias manufactureras en el altiplano boliviano (Rossell y Rojas, 2001). Cuando se comparan las tasas de crecimiento poblacional entre lo que hoy es El Alto y La Paz, es obvio que El Alto ha atraído la mayoría de los nuevos emigrantes, y se estima que para 2010 tenga un población mayor a la de La Paz (Arbona y Kohl, 2004).

Uno de los puntos clave es que El Alto creció y se organizó en relación con la gran concentración de una fuerza laboral dependiente de la economía informal. Esto es palpable en el Cuadro 1, cuando comparamos el crecimiento poblacional en relación con el crecimiento de la población económicamente activa (PEA). Entre 1992 y 2001 —cuando se obtuvo información censal— la población total aumentó en un 59,7%, mientras que la PEA lo hizo en un 79,4%. Esto indica que un mayor número de miembros de la familia tuvo que ingresar a la fuerza laboral, en proporción con el total de personas que se asentaban en la ciudad. Se puede asumir que esta mayor participación se debe a que los bajos

salarios no permiten el mantenimiento del hogar. Pero cuando desglosamos los cambios en la PEA, se observa sobre quién ha recaído la carga social de la crisis económica en El Alto. Mientras que la PEA masculina ha aumentado un 56,6% entre 1992 y 2001, la PEA femenina ha aumentado en un 129,1% durante el mismo periodo.

Cuadro 1
Fuerza laboral en El Alto (por número de habitantes)

	1992	2001
Población total	405.277	647.067
Población Económicamente Activa (PEA)	127.303	228.403
PEA masculina	87.261	136.663
PEA femenina	40.042	91.740

Fuente: *El Alto: indicadores sociodemográficos* (INE, 2001a).

En un estudio sobre los mercados laborales de El Alto, Rojas y Guaygua (2002) presentan datos que complementan esta descripción. La preponderancia de la economía informal es un aspecto que ha definido esta ciudad desde su formación. Entre 1989 y 2000, ésta representaba el 67% y el 70% de las actividades económicas respectivamente, concentrándose en particular en el comercio y la manufactura. Fue en estas actividades donde se produjo el incremento de la PEA y particularmente donde se concentró la PEA femenina.

Esta situación de precariedad laboral ha servido para intentar manipular a la clase obrera “sometiendo a todos sus miembros a la continua amenaza del desempleo”, pero simultáneamente ha contribuido a promover una identidad de clase discriminada (Rojas y Guaygua, 2002: 46). Se estima que un 70% de la población ocupada trabaja en una situación precaria, y un número que ha aumentado entre 1989 y 2000 trabaja en condiciones de “precariedad extrema”, lo que implica empleo eventual, largas horas de trabajo e ingresos que se encuentran por debajo de los niveles nacionales. Este último punto es importante, ya que tiene un fuerte impacto sobre los ingresos, y por tanto en los niveles de pobreza en El Alto.

La población ocupada que tiene un ingreso menor a un salario mínimo nacional muestra un comportamiento variable, ya que si bien en el año 1989 comprendió sólo el 9,3%, en los años 1995 y 2000 ascendió considerablemente al 26,6%, evidenciando la tendencia a un crecimiento sostenido de la población trabajadora que percibe por debajo de los salarios oficiales. (Rojas y Guaygua, 2002: 67)

Sobre la base de estos datos, se podría concluir que El Alto es un espacio en el que ha convergido una gran cantidad de población en un corto tiempo, guiada por una tácita promesa de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Pero esa promesa ha sido subyugada por un proyecto político que básicamente ha establecido un esquema fundado en la precarización y flexibilización laboral. El resultado ha sido una ciudad que concentra una población económicamente excluida, lo que conlleva un sinnúmero de tensiones sociales, y que ha llevado a los gobiernos de Paz-Zamora (1987-1992) y Banzer/Quiroga (1997-2002) a nombrar a El Alto como “ciudad en emergencia”. Esta tensión estalló durante las jornadas de octubre de 2003, cuando las tensiones sociales ya no podían ser desarticuladas o contenidas por la infraestructura institucional. Un joven alteño reflexionaba sobre las raíces de estos eventos.

La represión nos unió, dejamos nuestras peleas a un lado. Yo vi con mis ojos un chango muerto en la calle allicito. Estábamos emputados, pero no solo por los muertos, sino también por nuestra situación [económica y social]. Nadie se acuerda de nosotros... solo para las elecciones. Eso es ser pobre e indio en este país. (entrevista con OH, julio de 2004)

Este testimonio resalta no sólo las tensiones sociales, que son parte de la vida cotidiana de los alteños(as), sino también cómo la represión estatal representa “la última gota” que colma y desborda las discriminaciones, exclusiones y humillaciones que viven los residentes de esta ciudad. Mientras que esta sección ha esquematizado las raíces y dimensiones de la pobreza en El Alto, la próxima completará el anterior testimonio de lo que es “ser pobre e indio...”.

EL ALTO: IDENTIDADES INDÍGENAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

La ciudad de El Alto es un caso particular, no sólo por la dependencia de los residentes de la economía informal, sino también por la concentración de población indígena. Pero, como lo indica Quispe (2004), el ser o identificarse como indígena en El Alto conlleva múltiples negociaciones entre memorias históricas, expresiones culturales y formas de construcción de espacios políticos de participación en ellos. Estas negociaciones están también entrelazadas con historias, memorias y expresiones de los emigrantes de zonas mineras, que llegaron en gran cantidad a partir del cierre de minas estatales en 1985. Las formas de identificación de clase (minera, sindical, gremial, etc.) e indígena, en un contexto de precariedad laboral-social son los ejes que han alimentado las redes barriales que han servido para enfrentar los procesos de discriminación y exclusión.

Como fue mencionado anteriormente, estos procesos de discriminación y exclusión se manifiestan en los discursos de las elites sociales y sus representantes en la infraestructura institucional acerca de El Alto, que podrían resumirse en “ciudad de indios”. Estos discursos posicionan a la ciudad y sus residentes como un “otro social”, inferior a la clase blanca/mestiza, que justificaría las situaciones de precariedad que se viven. “Estos indios lo tienen todo y siempre, siempre están bloqueando” es otro de los discursos discriminatorios que pretende deslegitimar las demandas de los pueblos indígenas a tener los mismos derechos sociales que la población blanca/mestiza (citado en Mamani, 2005a: 83). En este sentido, la discriminación contra los resistentes de El Alto manifiesta un legado de la época de la colonia, cuando la población indígena era vista como subhumana, y por tanto desprovista de la capacidad de disfrutar los derechos de un ciudadano (derechos a la ciudad). Aunque con la revolución de 1952 los derechos de los pueblos indígenas fueron reconocidos oficialmente, las profundas raíces de estos procesos discriminatorios se mantienen vigentes (Quijano, 2005).

Son estos procesos históricos de construcción de ciudad los que han marcado a El Alto y sus residentes. Esta convergencia de historias y memorias indígenas y de clase ha sido la plataforma social sobre la cual se han organizado los barrios y se establecen entidades políticas locales; en fin, ha sido el eje a través del cual esta ciudad social se está construyendo política y físicamente. Y justamente esta convergencia de identidades discriminadas y excluidas plasmadas en espacio, alimentó las jornadas de octubre de 2003.

Antes de octubre de 2003 lo “indio” o indígena era asociado a lo rural, y la clase trabajadora de las ciudades siempre era considerada como sector popular. Inclusive los propios indígenas creían que dejaban de ser tales cuando abandonaban el campo para venirse a las ciudades. Los mineros por ejemplo se definían a sí mismos como clase obrera, pero nunca como indígenas. La dimensión de clase ocultaba su origen indígena, cuando en realidad una persona era obrera por ser indígena. (Patzí, 2003: 258)

Patzí alude a la tensión histórica en la clase obrera, hegemonizada por los mineros, que intentaba enmascarar sus raíces indígenas aunque mantenía algunas de sus tradiciones. Cuando las minas fueron cerradas en 1985, y gran parte de los 32.000 mineros y sus familiares llegaron a El Alto, se encontraron en una situación en la que ya no contaban con los privilegios (en el sentido relativo) que ofrecía pertenecer a la clase minera/obrero. El que “una persona [sea] obrero por ser indígena” revela cómo la discriminación laboral se concentra en la población indígena. Por otro lado, la reseña de Patzí también revela la gran complejidad social de esta ciudad, y cómo los procesos de discriminación

y exclusión tienen una importante dimensión espacial. Por lo tanto, vivir en El Alto resalta las dimensiones de la identidad indígena, sin renunciar necesariamente a la identidad de clase. En este sentido, el ser pobre e indio converge como un elemento de identidad que revela la identidad de la ciudad y conforma un imaginario político que les permitió organizar un frente en contra de la infraestructura institucional y sus políticas. Como lo mencionaba uno de los portavoces de las jornadas de octubre:

Siendo la mayoría aymara en la ciudad de El Alto, fue fácil tomar contacto y engancharlos en la lucha. Son los padres que están en las comunidades y son los hijos que están en la ciudad. El discurso que unifica es siempre en torno a Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Nosotros decimos que el coraje es más fuerte que cualquier modelo neoliberal. Eso hacemos cuando la sangre llama a la sangre. (Roberto de la Cruz, citado en *Pulso*, 2003c)

La forma en que De la Cruz resalta la memoria histórica de Tupaj Katari y Bartolina Sisa —que en el 1781 lideraron el cerco indio a la ciudad de La Paz— y la conecta con la infraestructura institucional, revela la forma en que estas historias y memorias sirvieron como una fuente de la que se nutrió, y a partir de la cual tomó forma un movimiento social. El “Cerco de La Paz” de 1781 se mantiene como un punto de referencia histórico sobre el cual se trazan paralelos: explotación de recursos por una casta social foránea que utiliza la discriminación y exclusión, a través de políticas de coerción y consentimiento, para establecer cierto margen de legitimidad de los privilegios de su posición de clase (Thomson, 2007). De manera similar, se traza un paralelo histórico con el periodo en el que a los indios no les era permitido caminar libremente por el centro de La Paz (hasta el 1952), con las precarias condiciones en las que se vive en El Alto.

DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN PLASMADAS EN ESPACIO

Los procesos de discriminación y exclusión social son plasmados en espacio, ya sea por la inaccesibilidad a espacios “públicos” o de acuerdo con los tipos de espacios a los que se tiene acceso, lo que Eduardo Galeano alguna vez denominó “islas de privilegio en un mar de desamparo y exclusión”. Es en este contexto histórico —de tensión y conflicto social— que las ciudades toman forma, que los barrios son construidos, que los espacios políticos son definidos, construidos, y luchados.

Cuadro 2
Infraestructura básica en la región metropolitana de La Paz

	La Paz	El Alto
Viviendas construidas en ladrillo	53%	22%
Viviendas construidas en adobe	46%	77%
Servicio de agua (en vivienda)	65%	35%
Servicio de agua (en patio)	26%	54%
Hogares sin acceso a servicios sanitarios en vivienda	16%	37%
Hogares con electricidad	95%	85%
Todas las necesidades de servicios básicos satisfechas	37%	7%

Fuente: *El Alto: indicadores sociodemográficos* (INE, 2001a) y *Bolivia: características de la vivienda* (INE, 2002).

En El Alto, los procesos de discriminación y exclusión —evidenciados en la precaria situación laboral y la concentración de una población indígena en un espacio urbano— han sido plasmados en la forma en que se ha constituido la ciudad. Estos procesos son más claros cuando se compara la infraestructura básica en la zona metropolitana de La Paz, que incluye La Paz y El Alto. Como se muestra en el Cuadro 2, la población de La Paz tiene una mejor provisión que El Alto. Mientras esto puede ser consecuencia del rápido crecimiento de El Alto, o de que La Paz fue fundada hace 457 años, y por tanto ha tenido mayor tiempo para desarrollar su infraestructura básica, algunos de los datos reflejan los niveles de pobreza y exclusión económica. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de la población de El Alto (77%) construya sus viviendas en adobe refleja su precaria situación económica. Otro ejemplo es la gran cantidad de calles alteñas que aún no han sido pavimentadas (94%) (Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 2002). El hecho de que sólo el 7% de los hogares (unos 11.500, de más de 164.000) cuenten con infraestructura básica es un indicador de cómo los residentes de esta ciudad han sido olvidados y hasta cierto punto discriminados por las entidades gubernamentales. Esto ha obligado a los residentes a tomar la construcción de esta ciudad en sus propias manos, ya sea por procesos de autoconstrucción de servicios básicos e infraestructura, o por la movilización de acciones para demandar que las entidades gubernamentales provean estos servicios. Como dijo un joven alteño: “La gente ha visto que estas acciones que se toman, ya sean marchas, huelgas, son el mejor instrumento o la mejor arma para poder enfrentar y lograr sus demandas” (entrevista con EM, junio de 2001). Como se mencionó anteriormente, los procesos de discriminación y exclusión han reforzado identidades locales, que a su vez generan la construcción de espacios de convergencia.

LAS REDES BARRIALES Y LA RUPTURA DE LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Existe una correlación directa entre la implementación del proyecto neoliberal en Bolivia y la conformación de la ciudad de El Alto (Arbona y Kohl, 2004). Los resultados de estos procesos se manifestaron en la organización de barrios y la articulación de las historias y memorias de estas poblaciones emigrantes.¹⁰ Por ejemplo, en sectores como Villa Ingenio, donde son más fuertes los nexos con zonas rurales, la expresión del sindicalismo agrario y las formas de organización territorial indígenas, tomó forma una organización con el *ayllu* como referente, pero que no olvida sus matices de clase. En estas organizaciones existía el control colectivo de espacios y se trabajaba bajo principios de “democracia comunitaria” (Patzí, 2004).

Por otro lado, en zonas donde la población estaba compuesta en su mayoría por emigrantes de las regiones mineras, como Santiago II, se privilegiaban formas mineras-sindicales de organización. Esto conlleva “aspectos fundamentales como las prácticas assembleísticas, la utilización de la ‘democracia sindical’, la búsqueda de consenso y la cohesión interna” matizadas con un fuerte discurso de clase obrera e historias de lucha en las minas (Cajías, 2004: 22). Simultáneamente, la rotación y el turno de actividades fueron características organizativas que se vieron reflejadas en la gran mayoría de las zonas que surgen a la superficie política, que a su vez manifiestan una convergencia de historias y memorias en la conformación de estas redes barriales (Mamani, 2005c).

Durante las jornadas de octubre de 2003, estas convergencias de contextos históricos-sociales también se manifestaron en la organización de redes barriales que representaban formas autónomas de control territorial. Fue a partir de estas formas de auto-organización que se conformaron comités de autodefensa, para enfrentar a las fuerzas militares o alertar sobre su acercamiento; comités de abastecimiento que aseguraban el acceso a alimentos, para los residentes o para los grupos de campesinos o mineros que llegaban para unirse a la luchas. Es a través de estas redes barriales que

[...] se teje una compleja solidaridad colectiva no vista desde la fundación de esta ciudad. Por esto es una multitud hecha cuerpo que tiene la capacidad de traspasar fácilmente las fronteras del poder constituido y las fronteras de la tolerancia social [...]. (Mamani, 2005a: 76)

¹⁰ Obviamente, no se está sugiriendo una pureza estática de identidades, más bien un punto de partida, que a medida que pasa el tiempo, se entrelaza con las dinámicas urbanas propias de El Alto, aunque los residuos históricos persisten.

Más allá de estas redes barriales, e integrando el argumento de Patzi (2003) sobre la preponderancia de la identidad indígena, Álvaro García-Linera, Marxa Chávez y Patricia Costas (2004) argumentan que no sólo fueron formas organizativas sino también “estructuras de identidad territorial”, a partir de las cuales se luchaba contra los procesos que eran vistos por los residentes como la fuente de su precaria situación de discriminación y exclusión. En este sentido, las redes barriales fueron el epicentro de un proceso de concentración de tensiones históricas. Estos territorios —receptores y rearticuladores de identidades discriminadas y excluidas— se convirtieron en espacios de convergencia donde toma forma un subsuelo político que explota en la superficie pública en momentos de crisis (Routledge, 2003; Tapia, 2001).

SURGIMIENTO DEL SUBSUELO POLÍTICO: OCTUBRE DE 2003

Las jornadas de octubre de 2003 revelaron los espacios y momentos en los cuales las tensiones generadas por los fracasos del régimen político fueron tan inadecuadamente manejadas, que comprometieron el margen de legitimidad de la infraestructura institucional, así como de la cúpula dirigenal de las entidades políticas locales de El Alto (Arbona, 2005). Cuando las marchas, bloqueos y enfrentamientos con los organismos del Estado llegaron a su apogeo, la Central Obrera Regional-El Alto (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) ya no pudieron manejar las movilizaciones. Mientras la violencia aumentaba y las tropas militares mataban civiles en las calles, las redes barriales se convirtieron en centros de liderazgo local. De esta manera, la dirigenia de la cúpula de las entidades políticas locales se ve reemplazada por la dirigenia localizada, que respondía a las vivencias e historias de la zona y sus residentes.

Las jornadas de octubre fueron la culminación de varias confrontaciones entre diferentes entidades políticas locales y elementos de la infraestructura institucional. Durante la segunda semana de septiembre de 2003, El Alto fue testigo de las primeras marchas y bloqueos en reacción a una resolución municipal, que establecía un sistema de catastro para regular las transacciones de bienes raíces. Bajo el nombre de Maya y Paya, esta resolución municipal (090/2003) fue rechazada por la población de El Alto bajo el liderazgo de la FEJUVE, que argumentaba que el proyecto de ley no era otra cosa que una estrategia para “sacarle más plata a los pobres” (*Prensa Alteña*, 2003a; *La Razón*, 2003a).¹¹ Las movilizaciones se expresaron en bloqueos de las principales vías

¹¹ Cabe resaltar que existe el antecedente de las jornadas de febrero de 2003, causadas por el intento de implementar un proyecto de impuestos por ingresos. Al mismo tiempo, los policías organizaron un motín demandando mayores ingresos. Las jornadas llegaron a su apogeo con

de El Alto, y después de 48 horas lograron su objetivo: la resolución municipal fue derogada (*El Diario*, 2003a). Este triunfo energizó a la FEJUVE y la COR, lo que incitó a los líderes a pronunciarse sobre otros temas de índole nacional, aunque se vieron antagonismos y distanciamientos entre líderes y bases, ya que algunos líderes fueron vistos como cómplices de la infraestructura institucional. Este fue un momento crucial en la conformación de una primera instancia de espacios políticos, ya que logró unir fuerzas sociales con base en un horizonte común. Estos discursos y eventos también pusieron a las fuerzas militares en estado de alerta (*El Diario*, 2003b).

Paralelamente a los eventos de septiembre en El Alto, una serie de movilizaciones en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz operó como la otra chispa que detonó las masivas movilizaciones de octubre. Una serie de bloqueos en la localidad de Warisata, en protesta contra el gobierno, que no había cumplido ciertas promesas, resultaron en una ofensiva militar que dejó cuatro personas muertas (*La Razón*, 2003c). Las muertes ocurrieron a raíz de un operativo militar que intentaba rescatar un a centenar de turistas que se vieron atrapados por los bloqueos, en el pueblo de Sorata (*Pulso*, 2003a). Las noticias de que militares habían matado a civiles en nombre de turistas extranjeros, alimentaron los discursos que afirmaban que la administración de Sánchez de Lozada no priorizaba los intereses de los bolivianos. Las muertes revelaron la falta de habilidad del gobierno para manejar los fracasos de sus políticas por otras vías, así como la impaciencia de la población frente a las promesas de mejorar su precaria situación (Gómez, 2004).

“¡No hay razón ni raciocinio para meter metralla a gente que está agarrando piedra!” (Radio Pachamama). Esto exclamaba un vecino, testigo de las matanzas y los atropellos por parte de los militares que intentaban contener las movilizaciones y así neutralizar los procesos contestatarios. Frente a las crecientes movilizaciones que se desataron, cuando llegaron a El Alto las noticias de las muertes en Warisata, la administración de Sánchez de Lozada estableció estrategias para intentar mantener la estabilidad política. Estas estrategias incluyeron decretos supremos que penalizaban las movilizaciones (DS 27209), pero finalmente la fuerza militar fue la única estrategia. A raíz de esta ruptura de la “disolución del orden estatal” y las muertes, se comenzaron a consolidar espacios políticos desde donde surgieron instancias locales, como las redes barriales, para retar la infraestructura institucional. Fue a través de las redes barriales que se orga-

el enfrentamiento violento entre policías y fuerzas militares, y la quema de varias instalaciones de partidos políticos, del gobierno central y municipal de El Alto. Para un buen resumen de las continuidades y divergencias de movilizaciones en Bolivia desde el año 2000, véase Cajías (2004).

nizaron y coordinaron asambleas comunales y distritales, y se decidieron las demandas y estrategias de presión (*Prensa Alteña*, 2003b). La resolución final de estas plenarios fue la organización de marchas masivas desde El Alto hacia La Paz. Mientras que al principio de las movilizaciones las demandas fluctuaban —la abrogación del DS 21060, el rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el reclamo de una asamblea constituyente, el repudio a la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos—, hacia el final éstas se redujeron a una sola consigna: la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (*Prensa Alteña*, 2003c). Bajo un ambiente de escalada de la violencia, grupos que normalmente no participan en este tipo de acción política —clase media, alcaldes de partidos tradicionales y hasta empresarios privados— se unieron a las marchas y participaron en huelgas de hambre. Los observadores estimaban que había entre 300.000 y 500.000 personas en la marcha del 15 de octubre (*La Razón*, 2003d; *El Diario*, 2003c). Para este momento, la ruptura de la infraestructura institucional se completaba con el distanciamiento de varios partidos políticos y el vicepresidente (*La Razón*, 2003c).

El papel de las redes barriales de El Alto fue trascendental en la articulación de las tensiones locales, magnificadas por lo que es visto por los alteños(as) como un régimen político que sostiene y reproduce inequidades económicas y sociales. Por otro lado, las redes barriales resaltaron el gran nivel de organización de los residentes de El Alto. En los momentos en que las jerarquías de las entidades políticas locales no respondían a las necesidades y demandas de las diferentes zonas, las redes barriales lograron articular una fuerza popular que no había sido vista en Bolivia desde la revolución de 1952. Esto resalta simultáneamente los límites del proyecto neoliberal y la creciente capacidad local para retar este régimen político y crear espacios políticos alternativos. Desde las redes barriales se resistieron los procesos de coerción y consentimiento, a través de la construcción de espacios políticos al margen de la infraestructura institucional y las jerarquías de las entidades político-sociales. Fue en este tiempo y espacio en el que se rompió el margen de legitimidad y los fracasos ya no podían ser desplazados ni neutralizados bajo la existente administración. La única salida —en la que se podrían mantener espacios sobre los cuales se podría reconstruir el margen de legitimidad de la infraestructura institucional— fue el cambio de presidente. Pero como sabemos, los cambios de personajes y discursos de la infraestructura institucional no necesariamente implican cambios de políticas o estructuras de poder. En este sentido, las redes barriales lograron el reconocimiento público y resaltaron la situación y demandas de los alteños(as), pero aún no han logrado concretizar propuestas alternativas. Las jornadas de octubre de 2003 fueron un hito histórico que tiene el potencial de transformar las estructuras sociales de Bolivia. El lema: “¡El Alto de pie, nunca de rodillas!”

manifiesta la dignidad y el compromiso de los alteños(as) de nunca más ser ciudadanos de segunda categoría.

CONCLUSIONES

Este ensayo ha presentado dos visiones de El Alto. Por un lado, las grandes oleadas de población indígena y minera que dependen de la economía informal, resultado de la implementación del proyecto neoliberal, han sido los principales factores en la construcción de esta ciudad. Estas condiciones han reforzado y concentrado la historia de discriminación y exclusión en Bolivia. Por otro lado, El Alto ha sido un espacio de convergencia de memorias e historias de emigrantes mineros y campesinos/indígenas, que ha sido una importante fuente de formación de espacios políticos contestatarios. Estas repercusiones urbanas e implicaciones sociales son importantes, no sólo para comprender los procesos sociales en las ciudades, sino también las tensiones (y rupturas) sociales generadas por los procesos de discriminación y exclusión.

Un punto central de este ensayo ha sido argumentar que los procesos hegemónicos, que intentan naturalizar y legitimar la discriminación y la exclusión, tienen (y dependen de) una dimensión espacial. En este ensayo se ha demostrado cómo El Alto concentra una población discriminada y excluida económica y socialmente, lo cual ha tenido un efecto directo sobre la manera en que se ha construido esta ciudad. Fue justamente este encuentro, en un contexto de expansión y profundización del proyecto neoliberal, lo que genera la organización de las redes barriales que retan (y por unos días rompen) el margen de legitimidad de la infraestructura institucional.

La organización de espacios de convergencia durante los momentos de crisis de las jornadas de octubre de 2003, manifestada en las redes barriales, fue clave en la articulación y surgimiento de un subsuelo político, alimentado por las historias y memorias de los emigrantes indígenas y mineros. Este surgimiento del subsuelo político responde a los procesos de discriminación y exclusión vividos por los residentes, y concentrados en esta ciudad. La torpe violencia de la administración de Sánchez de Lozada fue sólo la chispa que desató las movilizaciones y retó el margen de legitimidad de la infraestructura institucional. En este sentido, los procesos de discriminación y exclusión tienen una dimensión espacial, lo que a su vez es un elemento articulador de espacios políticos contestatarios.

La elección de Evo Morales por una mayoría absoluta e histórica (54% a nivel nacional y 88% en El Alto) y el abrumador apoyo a su gestión en el referéndum de 2008 (67% a nivel nacional y 91% en El Alto), refleja el deseo popular de construir un proyecto alternativo. En su discurso de posesión, Evo Morales

capturó algo por lo que creo que los(as) alteños(as) estuvieron dispuestos a enfrentar a las fuerzas militares: "los bolivianos queremos vivir bien". Las reacciones de los(as) alteños(as) a las políticas de la nueva administración serán un importante barómetro de su gestión. Esta lucha pretende transformar las bases sociales, políticas y económicas del país, y un paso fundamental será enfrentar las formas en que estos espacios de privilegio y exclusión han sido construidos y cómo podrían ser organizados conforme a una nueva visión de país. Si Morales no da claras señales de un cambio social, que reestructure los procesos hegemónicos y la infraestructura institucional que sustenta la discriminación y exclusión, se podrían repetir las movilizaciones de octubre de 2003.

BIBLIOGRAFÍA

- Albó, Xavier, Godofredo Sandoval, y Tomás Greaves (1981). *Chukiyawu: La Cara Aymara de La Paz. El Paso a la Ciudad*. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
- Anderson, Perry (1976). "The Antinomies of Antonio Gramsci", en *New Left Review* I, N° 100.
- Arbona, Juan Manuel (2001). "The Political Economy of Micro-Enterprise Promotion Policies: Restructuring and Income-Generating Activities in El Alto, Bolivia", Ph.D. Dissertation. Ithaca: Cornell University.
- _____ (2005). "Los límites de los márgenes: organizaciones políticas locales y las jornadas de octubre de 2003 en El Alto, Bolivia", en *Nueva Sociedad*, N° 197.
- Arbona, Juan y Benjamin Kohl (2004). "City profiles: La Paz-El Alto", en *Cities*, Vol. 21, N° 8.
- Auza, Verónica (2004). *Memoria testimonial de la "Guerra del Gas"*. La Paz: Caritas.
- Bourdieu, Pierre (1989). "Social Space and Symbolic Power", en *Sociological Theory*, Vol. 7, N° 1.
- Brenner, Neil (2000). "The Urban Question as a Scale Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale", en *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 24, N° 2.
- Cajías, Magdalena (2004). "El poder de la memoria: articulaciones ideológico-culturales en los movimientos sociales", en *Barataria*, N° 1.
- Castells, Manuel (1983). *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Chin, Christine y James Mittelman (1997). "Conceptualizing Resistance to Globalization", en *New Political Economy*, Vol. 2, N° 1.

- Crouch, Dora, Daniel Garr y Axel Mundigo (1982). *Spanish City Planning in North America*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press.
- Davis, Mike (2004). "Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat", en *New Left Review*, N° 26.
- De la Fuente, Gerardo (1995). "La rebelión del nuevo humanismo", en *Memoria*, N° 75.
- Díaz-Polanco, Héctor (1991). *Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México: Siglo XXI.
- El Diario* (2003a). "El Alto acató paro cívico declarado por la Fejuve", 16 de septiembre.
- _____ (2003b). "Ciudad de El Alto paraliza actividades por paro cívico", 2 de octubre.
- _____ (2003c). "El pueblo no cede, exige renuncia del Presidente", 17 de octubre.
- García Linera, Álvaro, Marxa Chávez y Patricia Costas (2004). *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia: estructuras de movilización, repertorios culturales, y acción política*. La Paz: Diakonia y Oxfam.
- Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (2002). *Plan Progreso-El Alto*. El Alto: GMEA.
- Gómez, Luis (2004). *El Alto de pie: una insurrección aymara en Bolivia*. La Paz: Comuna.
- Gramsci, Antonio (1995) [1971]. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Green, Duncan (2003). *Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America*. New York: Monthly Review.
- Hale, Charles (2004). "Rethinking Indigenous Politics in the Era of the 'Indio Permitido'", en *NACLA*, Vol. 38, N° 2.
- Harvey, David (1997). "Contested Cities: Social Process and Spatial Form", en Nick Jewson y Susan MacGregor (comps.), *Transforming Cities: Contested Governance and New Spatial Divisions*. London: Routledge.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2001a). *El Alto: indicadores sociodemográficos*. La Paz: INE.
- _____ (2001b). *Mapa de la pobreza*. La Paz: INE.
- _____ (2002). *Bolivia: características de la vivienda*. La Paz: INE.
- La Razón* (2003a). "Los vecinos de El Alto cercaron a La Paz por dos formularios", 16 de septiembre.
- _____ (2003b). "La Paz queda cada vez más aislada por el bloqueo de las carreteras", 22 de septiembre.
- _____ (2003c). "Carlos Mesa marca distancia de la protesta; el oficialismo lo aísla", 17 de octubre.

- _____ (2003d). “Una marcha multitudinaria pidió la renuncia de Sánchez de Lozada”, 17 de octubre.
- Mamani, Pablo (2005a). *Geopolíticas indígenas*. La Paz: Centro de Estudios Estratégicos (CADES).
- _____ (2005b). “El Alto, ciudad en movimiento”, en *Alto Parlante*, N° 1.
- _____ (2005c). *Microgobiernos barriales: levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre 2003)*. La Paz: CADES e Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS).
- Patzi, Félix (2000). *Etnofagia estatal: modernas formas de violencia simbólica*. La Paz: IDIS.
- _____ (2003). “Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía: triunfos y vicisitudes del movimiento indígena desde 2000 a 2003”, en Forrest Hylton, Félix Patzi, Sergio Serulnikov y Sinclair Thomson (comps.), *Ya es otro tiempo el presente: cuatro momentos de insurgencia indígena*. La Paz: Muela del Diablo.
- _____ (2004). *Sistema comunal: una propuesta alternativa al sistema liberal*. La Paz: CEA.
- Peck, Jamie (2004). “Geography and Public Policy: Constructions of Neoliberalism”, en *Progress in Human Geography*, Vol. 28, N° 3.
- Peck, Jamie y Adam Tickell (2002). “Neoliberalising Space”, en *Antipode*, N° 34.
- Prensa Alteña* (2003a). “Formularios maya y paya unió a todos los alteños contra el MIR”, Vol. 2, N° 14.
- _____ (2003b). “Comités de huelga guiaron paro más largo de la historia alteña”, Vol. 2, N° 14.
- _____ (2003c). “Furia alteña arrasó con el gobierno de Goni, tras derrotar el Maya y Paya”, Vol. 2, N° 14.
- Pulso* (2003a). “19 de septiembre ¿comienza otro ciclo? Los “cabreados” vuelven a las calles”, N° 216, septiembre.
- _____ (2003b). “Insurgencia civil y ceguera “culpable” del poder”, N° 220, octubre.
- _____ (2003c). “El Alto: la ciudad rebelde y sin límites”, N° 218, octubre.
- Quijano, Aníbal (2005). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Quisbert, Máximo (2003). *FEJUVE El Alto (1990-1998): dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión*. La Paz: Taller de Historia Oral Andina (THOA).

- Quispe, Marco (2004). *De Ch'usa Marka (pueblo vacío) a Jach'a Marka (pueblo grande): pequeñas historias contadas desde el alma misma de El Alto*. La Paz: Plural.
- Rivera, Silvia (1993). "La Raíz: colonizadores y colonizados", en Xavier Albó y Raúl Barrios (comps.), *Violencias encubiertas en Bolivia*. La Paz: CIPCA.
- Rojas, Bruno y Germán Guaygua (2002). *Empleo en tiempos de crisis, Serie Avances de Investigación, N° 24*. La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
- Rossell, Pablo y Bruno Rojas (2001). *Competitividad, acumulación y empleo: estudio de caso en el ramo de las confecciones*. La Paz: CEDLA.
- Routledge, Paul (2003). "Convergence Space: Process Geographies of Grassroots Globalization Networks", en *Transactions. Institute of British Geographers*, Vol. 28, N° 3.
- Sandoval, Godofredo y M. Fernanda Sostres (1989). *La ciudad prometida: pobladores y organizaciones sociales en El Alto*. La Paz: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
- Soustelle, Jacques (1996). "Daily life of the Aztecs on the Eve of the Spanish Conquest", en Gilbert Joseph y Mark Szuchman (comps.), *I Saw a City Invincible: Urban Portraits of Latin America*. Wilmington: Scholarly Resources.
- Tapia, Luis (2001). "Subsuelo político", en Álvaro García-Linera, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia (comps.), *Pluriverso: teoría política boliviana*. La Paz: Muela del Diablo.
- Thomson, Sinclair (2007). *Cuando sólo reinasen los indios (La política aymara en la era de la insurgencia)*. La Paz: Muela del Diablo.
- United Nations Human Settlements Programme (UNCHS) (2003). *The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements*. London: Earthscan.
- Von Hagen, Adriana y Craig Morris (1998). *The Cities of the Ancient Andes*. New York: Thames and Hudson.